



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
SEÑOR JUEZ 17 ADMINISTRATIVO DE CALI
E. S. D.**

**MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN: 76001-33-33-017-2024-00247-00
DEMANDANTE: ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA Y OTROS
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
MANTENIMIENTO VIAL**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI**

AURA MARÍA BENAVIDES, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.112.460.391 de Jamundí, abogada titulada con tarjeta profesional N. 220.484 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme con el poder especial conferido por la Doctora **ANA CATALINA CASTRO LOZANO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.180.813, Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, nombrada mediante Decreto No.4112.010.20.0844 de 20 de Septiembre de 2024 y Acta de Posesión No. 725 de 08 de octubre de 2024, debidamente facultada por el Doctor **ALEJANDRO EDER GARCÉS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.453.964, en su condición de Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicio de Santiago de Cali y representante legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0010 de enero 03 de 2024 “Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de representación judicial, administrativa y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones”, para que represente judicialmente a la Entidad Territorial, de manera atenta descorro el traslado para contestar la demanda que en el medio de control de la referencia se interpuso contra el Distrito Especial de Santiago de Cali y otros.

I. OPORTUNIDAD

El artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 -que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011-, establece que el auto admisorio de la demanda contra entidades públicas, se debe notificar personalmente mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011. A su vez, el artículo 172 *ejusdem*, señala que el término del traslado dentro del cual se debe contestar la demanda, es de treinta (30) días y comenzará a correr de conformidad con lo previsto en el artículo 199.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, dispone que la notificación personal ***“se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”***.

El auto admisorio de la demanda del asunto, fue notificado al correo dispuesto por el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI para recibir notificaciones judiciales, el



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

día martes 12 de noviembre de 2024; en consecuencia, el término para contestar la demanda empezó a contar a partir del miércoles 13 de noviembre de 2024, y por lo tanto, se contesta dentro del término del traslado.

II. SÍNTESIS DEL LITIGIO

La parte actora solicita que se declare administrativamente responsable al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI y, como consecuencia de ello, se reconozcan los perjuicios materiales e inmateriales derivados del presunto accidente de tránsito ocurrido el día 08 de noviembre del año 2022.

Según lo expuesto en la demanda, el señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA quien se encontraba en servicio activo como policía, se movilizaba en la motocicleta marca HONDA XRE 300 con placas TXA 41F sobre la calle 42 con carrera 94 del municipio de Cali, Valle del Cauca, cuando cayó en un hueco que se encontraba al lado izquierdo de la vía por donde transitaba, hueco que no observó, ya que, según la demanda, las circunstancias climáticas impidieron su visibilidad.

III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO AL CUARTO: Es cierto, según informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001523457, en el cual se describe la existencia de una irregularidad en la vía. Sin embargo, la sola demostración del estado de la misma no atribuye una responsabilidad directa, es algo que deberá probarse en el proceso y otras situaciones externas que hayan influido en el resultado.

AL HECHO QUINTO: NO ME CONSTA, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos son materia de litigio y deberá ser probado por la parte actora.

AL HECHO SEXTO AL OCTAVO: NO ME CONSTA, la causa determinante del accidente es materia de litigio y debe ser probada por la parte actora, al igual que los perjuicios reclamados.

AL HECHO NOVENO: NO ME CONSTA, no existe prueba que acredite lo manifestado en este hecho y son aseveraciones que deberán acreditarse plenamente por la parte demandante, conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P.

AL HECHO DÉCIMO A DÉCIMO TERCERO: NO ME CONSTA, es necesario señalar al señor juez, que para llegar a cualquier conclusión en este proceso, resulta indispensable analizar las pruebas aportadas, cuya carga probatoria recae en la parte demandante. Por lo tanto, dicha apreciación carece de solidez, ya que la determinación de los hechos y su valoración forman parte del desarrollo del proceso y la decisión que se tome frente al material probatorio que se incluye.

AL HECHO DÉCIMO CUARTO: ES CIERTO, según poder que reposa en el expediente.

IV. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Me opongo a todas y cada una de ellas, y en consecuencia solicito respetuosamente al Honorable Despacho, **DENEGAR** las pretensiones de la demanda y abstenerse de declarar administrativamente responsable al Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial, ni condenar patrimonialmente por los perjuicios



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

materiales y morales, con ocasión a los hechos acaecidos el 08 de noviembre de 2022 al señor **ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA**. Esto, en razón de que en el presente caso no se ha demostrado el nexo de causalidad que reclama la presunta responsabilidad planteada en la demanda, y este no puede estructurarse a partir de las afirmaciones del demandante.

Es preciso indicar que, en el presente caso la víctima se encontraba ejecutando una actividad peligrosa, por lo tanto, es necesario evaluar su conducta y la incidencia de esta en la concreción del accidente.

Como se observa del escrito de demanda y el material probatorio aportado, no existen elementos que permitan configurar una responsabilidad a cargo del Ente Público. Asimismo, aun en el supuesto de que se llegara a comprobar la existencia del hecho que presuntamente generó el daño, las pruebas allegadas no permiten edificar una responsabilidad Estatal; por el contrario, los elementos adjuntados al caso, muestran como causal de exoneración de la responsabilidad, la culpa exclusiva de la víctima, ya que es la causa adecuada al resultado del presunto daño del demandante, lo que constituye un hecho que no es atribuible a esta entidad.

En este sentido, dado que no se observan pruebas suficientes para establecer un nexo de causalidad, entre el daño alegado y la actuación de la entidad territorial, y considerando que las circunstancias en las que ocurrió el supuesto accidente no derivan de una acción u omisión de la administración, solicito de manera respetuosa al señor Juez, negar las pretensiones de la demanda.

V. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

El Distrito Especial de Santiago de Cali no es responsable de resarcir los perjuicios solicitados por el señor **ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA** y otros.

Por tal razón, ME OPONGO a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, porque, como quedará demostrado en el transcurso del proceso, no le corresponde al Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial, responder por las afectaciones generadas por el demandante con ocasión al accidente de tránsito de fecha 08 de noviembre del 2022.

- A los Perjuicios Inmateriales

Morales:

Me opongo al reconocimiento del daño moral solicitado por la parte actora, ya que no están acreditados los elementos que configuran el daño moral, no se observa en el expediente prueba documental o pericial que pruebe las circunstancias de sentimientos de dolor, aflicción, pesadumbre y dolor padecido. Esta objeción se presenta considerando la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al Distrito Especial de Santiago de Cali, de los perjuicios reclamados y por ende una falta de acreditación de estos.

Lo anterior toda vez que:

“[E]n relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor; por tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en las sentencias de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de lesiones a una persona, proferidas el 28 de agosto de 2014
Este entendimiento es congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar”
[...]
Huelga aclarar que para el reconocimiento del perjuicio moral derivado de lesiones deberá tenerse en cuenta “la valoración de la gravedad o levedad de [aquella] reportada por la víctima”.

Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en el plano psíquico interno del individuo reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien. Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

Al respecto el Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, estableció entre otras cosas que:

(...) “El precio del dolor está llamado a establecerse por - Arbitrium Judicis fundado en las pruebas que reposen en el plenario, en ese orden de ideas, si la prueba plena del perjuicio no obra, difícilmente la sana crítica y las reglas de la experiencia de las que se vale legítimamente el operador judicial podrán permitirle establecer vía compensación una afectación a un bien personalísimo, mucho menos tendrá algo por tasar o establecer” (...)

Así mismo es de señalar que estos han sido tasados en forma excesiva, siendo llevados al monto de 100 S.M.L.M.V para cada uno de los demandantes. El Consejo de Estado ha fijado como referente en la liquidación del perjuicio moral para eventos de lesiones, la valoración en cinco niveles de cercanía afectiva entre la victima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de víctimas indirectas.

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1 Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	NIVEL 2 Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	NIVEL 3 Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	NIVEL 4 Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	NIVEL 5 Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5



También se ha señalado que la acreditación de los perjuicios morales es necesaria, sin perjuicio de aquellos eventos en los que se aplican presunciones derivadas del parentesco, que pueden desvirtuarse demostrando la debilidad de la relación familiar.

En este postulado resalta el principio procesal de la carga de la prueba que indica que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, principio que no se evidencia en el libelo demandatorio pues lo único que surge del mismo es la petición de los mencionados perjuicios, pero nada se dijo sobre las circunstancias de dolor que amerita su reconocimiento.

- Daño en la vida de relación o daño a la salud

Me opongo, la parte demandante no acredita la afectación negativa de su relación con las demás personas y con su entorno, ni tampoco la limitación o impedimento para llevar a cabo actividades rutinarias o placenteras que inciden en su rol vital o su proyecto de vida. En este sentido, el juez deberá valorar las consecuencias del accidente únicamente en la medida en que se evidencian alteraciones en el comportamiento o desempeño del demandante dentro de su entorno social y cultural, que agrave su condición. No obstante, los argumentos expuestos en la demanda no constituyen un medio probatorio suficiente, ya que se requiere una prueba pericial que sustente dichas afirmaciones.

Asimismo, al pretender el reconocimiento del perjuicio a la vida de relación, la parte demandante no demuestra la existencia de una restricción o privación de desarrollar actividades normales o cotidianas ni acreditan la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables, tampoco prueba un menoscabo en su interacción con otras personas de su entorno, lo que impide establecer la configuración de dicho perjuicio.

- A los Perjuicios Materiales

Me opongo al reconocimiento y pago del lucro cesante solicitado por la parte actora; la manifestación de los hechos resulta insuficiente como elementos de juicio para establecer la cuantía de sus ingresos.

Se pone de presente y consideración del Despacho que al llevar a cabo el análisis de esta pretensión, se evalúe la condición y aplicación al régimen especial al que se encontraba adscrito el demandante como miembro de la Policía Nacional al momento de los hechos.

Lo anterior, bajo el escenario que se logre demostrar y establecer en el transcurrir del proceso, que existió o existe un reconocimiento o indemnización por la entidad POLICÍA NACIONAL a favor del demandante; pues se podría establecer el fenómeno de la “conurrencia de indemnizaciones”, circunstancia que le produciría un enriquecimiento sin causa.

VI. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

La parte demandante solicita se declare administrativamente al Distrito Especial de Santiago de Cali y que, como consecuencia, se le condene a pagar unas sumas de dinero por perjuicios materiales (lucro cesante) y perjuicios inmateriales (morales), en observancia de las lesiones presentadas por el señor Andrés Felipe Rodríguez Mora, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el día 08 de noviembre de 2022, mientras se desplazaba en la motocicleta placas TXA41F como policía patrullero al caer a un hueco que se encontraba al lado izquierdo de la vía.

La parte actora se limita a señalar una responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali y que como consecuencia se le condene a pagar una suma de dinero por perjuicios materiales, perjuicios morales, sin que se prueben las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el accidente de tránsito, pues de los anexos de la demanda lo que resulta claro es que la persona que iba conduciendo el vehículo, estaba desempeñando una actividad altamente peligrosa y como tal, debió demostrar no sólo diligencia y cuidado sino el debido acatamiento de las normas de tránsito.

Ahora bien, señala la parte actora que la conducta de la Administración se enmarca en una falla del servicio por falta de mantenimiento vial y señalización como causa generadora del accidente de tránsito, lo cual le corresponde probar.

Es importante traer a colación, el pronunciamiento de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, Consejera Ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, Radicación Número: 20001-23-31-000-1999-00499-01(22941), Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil doce (2012), en los siguientes términos:

...” ACCION DE REPARACION DIRECTA - Accidente de tránsito por mal estado de la vía / CARGA DE LA PRUEBA - Definición / CARGA DE LA PRUEBA - Requisitos

La carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos (...) se trata de una noción que se acompasa con los valores de libertad, autorresponsabilidad, diligencia y cuidado sumo en la ejecución de la conducta procesal que mide y proyecta las afirmaciones y negativas y repercute en la decisión. (...) sobre su contenido material, es dable afirmar que la carga de la prueba tiene que ver (i) con la posibilidad de obrar de determinada manera en pro de conseguir un resultado jurídico (constitutivo, declarativo o de condena) esperado de un proceso y (ii) con reglas indicativas de cómo deberá resolverse cuando la ausencia de pruebas impida que el juez adquiera certeza o convencimiento respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento. A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

NEXO CAUSAL - Elemento para establecer responsabilidad del Estado / ELEMENTO DE CAUSALIDAD - No se probó

De conformidad con la regla onnus probando incumbit actori, le correspondía a la parte demandante, en los términos señalados en el art. 177 del C.P.C., pues quien pretende derivar de los hechos que alega consecuencias patrimoniales a su favor y a cargo de quien convoca al proceso, le incumbe



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

demostrar esos supuestos fácticos. En este sentido, la Sala encuentra que, aunque está demostrada la ocurrencia del accidente y así mismo la causación de algunos perjuicios a los demandantes, no se estableció el elemento causal que vincule al Invías o al municipio de San Martín con la colisión. (...) no sólo la parte demandante fue displicente en la acreditación de la falla y su atribución a las entidades públicas demandadas, sino que la relación de causalidad entre esa irregularidad y el accidente se desvanece cuando en el plenario se acreditó que la víctima percibió la excesiva velocidad con que se desplazaba el tercero que causó la colisión y este, a su vez, reconoció ante las autoridades de tránsito que no pudo evitar el impacto porque se quedó sin frenos.”

En nuestro sistema, corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad, para que se pueda atribuir la responsabilidad de la entidad demandada, las pruebas que se acrediten en el proceso debe demostrar tal falla.

Con ello, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación civil, por medio de sentencia de 2007 proferida en el expediente N° 05001-3103-000-1997-05125 fijó los criterios para resarcir el daño de la siguiente manera:

“Para que un daño sea objeto de reparación tiene que ser cierto y directo, por cuanto solo corresponde reparar los perjuicios que se presenta como real y efectivamente causado y como consecuencia inmediata de la culpa o el delito; y ha puntualizado así mismo, que de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, quien demanda judicialmente la indemnización de un perjuicio que ha sufrido le corresponde demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación persigue y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento padecido por la víctima”

De igual forma, es importante considerar que se configura la presunción de responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas, dado que estas requieren un máximo grado de pericia y diligencia, lo que implica garantizar todos los elementos de responsabilidad.

LA FALLA DEL SERVICIO

Acerca de la necesidad de probar la falla del servicio, dentro del régimen del Artículo 90 de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado, en reiterada Jurisprudencia, se ha referido a la necesidad de probar la falla del servicio por parte de la Administración. Es así, como en Sentencia de octubre 6 de 1.995, Consejero Ponente, Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 9535, dijo:

“Comienza por señalar la Sala que el régimen de la responsabilidad presunta derivada del ejercicio de una actividad peligrosa por parte de la administración (Conducción de vehículos), en el cual solamente se requiere demostrar el daño y la relación causa, pudiendo la entidad demandada exonerarse sólo si demuestra la existencia de fuerza mayor o culpa de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, no es aplicable al caso sub-judice., perjuicio de una actividad estatal, en sí misma peligrosa desarrollada para provecho suyo y de la colectividad.

Aquí la responsabilidad que pretende imputarse a la administración no se deriva del ejercicio de una actividad desarrollada mediante un nexo instrumental peligroso. Todo lo contrario: ella se deriva (sic) una omisión de la administración.

Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal.



Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acreditar la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el incumplimiento de un deber y demostrar que dicha falta fue la causante del daño”.

Y, en Sentencia del 5 de agosto de 1.994, Proceso No. 8487, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:

“1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa la responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la anti juridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la Carta, cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración se constituye en un elemento que debe ser acreditado por el demandante. Así lo ha repetido esta misma Sala.

En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esta conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.

En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume.

En ambas hipótesis ese primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falla o falta de la administración, pero el que lo sufre no tenía por qué soportarlo, el acreedor, como es apenas lógico, deberá demostrar el daño y por qué pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía por qué sufrirlo.

En síntesis, la nueva constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva no borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender” (Sentencia del 25 de febrero de 1.993, ponente, Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 7742)”.

En segundo lugar, estima la Sala que para que en estos casos pueda afirmarse que se presenta la falla del servicio, resulta necesario determinar el alcance de la obligación estatal que se denuncia como incumplida o como cumplida defectuosamente, debiendo orientarse esta determinación hacia la noción relativa de este concepto elaborada por la doctrina y adoptada por la jurisprudencia.

Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su “*vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades*”, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede ser obligado a lo imposible.

La noción de la falla del servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser reputado como culposo o como no culposo, en este sentido se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 11 de octubre de 1.990, Exp. 5737, donde expresó:

“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el carácter de relativo que presenta la falla del servicio y ha señalado que para hablar de ella hay que tener en cuenta la realidad misma, el desarrollo, la amplitud y la cobertura de los servicios públicos y que ella no puede tener, la misma extensión en un país desarrollado que uno como el nuestro que apenas está en vía de desarrollo.

Es cierto que en los términos del Artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes que a partir de ese texto que fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada que la determinación es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación a que circunstancias de tiempo, modo y lugar, como si hubieran sucedido los hechos así como a los recursos con que contaba la Administración para prestar el servicio para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”.

Sobre el mismo tema, en ponencia del mismo Consejero, doctor Carlos Betancur Jaramillo, expediente 10327, dijo: “Por la actividad peligrosa ejercitada tanto por la administración como por los particulares, debe *acudirse a la falla probada del servicio según la cual quien debe sacar adelante sus pretensiones está en la obligación de demostrar que el demandado fue el causante del daño*”(subraya fuera de texto)

De lo anteriormente expuesto se colige que, no se podrá condenar a la entidad pública Distrito Especial de Santiago de Cali, al pago de los perjuicios materiales y morales, por sustracción de materia, ya que como se demostrará no hubo participación de sus servidores ni mucho menos falla del servicio, razón por la cual muy respetuosamente solicitó no acceder a las pretensiones de la parte demandante.

INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA SUPUESTA FALLA.

El aspecto fundamental para dirimir éste asunto, será el análisis que se haga frente al nexo de causalidad, elemento de vital importancia dentro de los requisitos que se exigen para que surja la responsabilidad civil extracontractual. Como su nombre lo indica nexo de causalidad es la relación, el vínculo, que debe existir entre el hecho y el correspondiente daño. Si no hay nexo causal no surge la responsabilidad civil.

La tesis de “causalidad adecuada”, sostiene que los fenómenos que concurren a un resultado son de varias categorías. Unos de incidencia determinante que son causas y otros de incidencia menos determinante que son las condiciones. Dentro de las verdaderas causas, es decir, excluyendo las condiciones, debe seleccionarse la más determinante, es decir, la causa adecuada al resultado.

Para adoptar cualquier decisión en este caso con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, es indispensable que el operador jurídico se encuentre convencido por ellas,



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

es decir, que se encuentren en estado de certeza sobre los hechos que declaran. Si las pruebas no alcanzan a producir esa convicción, porque no existen o porque pesa en su espíritu por igual en favor y en contra, o más en favor de una conclusión, pero sin despejar completamente la duda razonable, no podrán apoyarse en aquellas para resolver.

La parte demandante tiene la carga de probar los hechos alegados en su demanda, según los cuales el 08 de noviembre de 2022, el señor ANDRÉS FELIPE MORA RODRÍGUEZ, se desplazaba en la motocicleta placas TXA 41F, modelo XRE-300, cuando encuentra un bache en la vía que le hizo perder el control y posteriormente, volcarse. Para sustentar su reclamación, debe demostrar que actuó con prudencia al conducir, cumpliendo las normas de tránsito y acreditar que el supuesto mal estado en la vía fue la causa directa del accidente.

Sin embargo, no se cuenta material probatorio que sustente la responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali. En este caso, no se configura un nexo causal, pues la evidencia disponible indica que la imprudencia del señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA fue un factor determinante en la ocurrencia del accidente.

DEL INFORME DE POLICÍA DE TRÁNSITO No. A001523457

Es importante destacar, que en el presente caso, se alega una presunta falla en el servicio debido a una irregularidad en la vía, cuya existencia se pretende acreditar mediante un informe policial.

En principio debe indicarse que el informe de tránsito no permite certificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos descritos en la demanda, pues el agente de tránsito Humberto Castañeda Gil con Placa 305 de la Secretaría de Movilidad, suscribió el mismo, cuando había transcurrido dos horas y media del acaecimiento de los hechos, con lo cual se puede establecer que el mismo solo consigna la realidad de las circunstancias en las que se dio el accidente de tránsito, sino que consigna la narrativa dada por el compañero del lesionado, el señor Chacón Padilla.

Ahora bien, se registró como hipótesis del accidente el código 306: "Huecos en la vía". No obstante, es necesario precisar que, conforme al artículo 144, inciso primero, ley 769 de 2002, dicho informe es exclusivamente descriptivo y debe contener, entre otros elementos, el estado de la vía, la huella de frenada y el grado de visibilidad, etc. Lo cual está consignado en el informe, indicando que:

"ÁREA: URBANA
SECTOR: RESIDENCIAL
DISEÑO GLORIETA:
CONDICIONES CLIMÁTICAS: LLUVIA
huella de frenada 1.20mts"

El Consejo de Estado ha indicado que el IPAT, pese a ser un documento público que acredita la ocurrencia del accidente, la fecha, hora y las partes involucradas, sólo contiene una hipótesis del siniestro. Por lo tanto, requiere de otros medios de prueba para su valoración, ya que además se elabora con base en la narración de los hechos por parte



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

de la víctima y se realiza con posterioridad al accidente, lo que lo convierte en un elemento insuficiente para demostrar la existencia del daño.

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia T 475 de 2018, señaló:

"El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se cino al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas. (...)"

De este modo, el informe recolectado no constituye una prueba pericial, pues si bien describe el suceso, no acredita el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Según el croquis del informe policial de accidente de tránsito manifiesta que tiene una escala de 1-200 y, con base en las mediciones realizadas, se estima que la huella de arrastre se prolonga significativamente desde la irregularidad de la vía, mientras la motocicleta quedó a una distancia considerable de dicho punto. Esto evidencia que el señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA no circulaba a una velocidad de 20 km/h tal como lo afirma en sus declaraciones, ya que la fuerza de arrastre no permitiría tal distancia.

Por lo tanto, no es posible configurar una falla en el servicio, puesto que el presunto accidente no se produjo por una acción u omisión atribuible a la entidad demandada. El único elemento que brinda certeza sobre lo ocurrido es que el señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA estaba realizando una actividad peligrosa, la cual exige de quien la ejecuta un elevado grado de pericia, integrando sus conocimientos y habilidades con una adecuada evaluación del riesgo inherente a la conducción, sin comprometer su seguridad ni la de terceros.

En este sentido, queda demostrado que el demandante no actuó conforme a las disposiciones normativas, ya que tenía la obligación de conducir con la máxima atención y precaución. Sin embargo, el material probatorio no permite acreditar que haya cumplido con dicho deber, ya que no acató las normas del CNT, ni actuó con la debida prudencia y diligencia, por lo que su conducta influye directamente en el resultado.

El comunicado oficial GS-2022-146602- MECAL anexado a la demanda, da cuenta de los hechos que precedieron al accidente de tránsito. En dicho documento se establece que el señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA se encontraba en una estación de servicio cuando observó el paso de un vehículo marca scape. En respuesta, realizó la señalización correspondiente para que el conductor detuviera la marcha, sin embargo, hizo caso omiso a la indicación.



Ante la situación presentada, procedió a activar el “plan candado”, iniciando seguimiento al vehículo a una velocidad que seguramente era superior a la de 20 km/h, y es así como en el transcurrir de la persecución, la motocicleta tropezó con el hueco y posteriormente sucedió el volcamiento.

Con lo anterior queda completamente desvirtuada la aseveración plasmada en el escrito de la demanda, respecto a la velocidad a la que se desplazaba fuese de 20 km/h. En el momento de los hechos, el señor Rodríguez Mora se encontraba realizando una maniobra que exigía un desplazamiento a mayor velocidad para dar seguimiento a otro vehículo, lo que implica que circulaba por encima del límite permitido, constituyendo una infracción directa a las normas de tránsito, dado que no hay eximente para incumplirlas.

Conforme al artículo 106 de la ley 769 de 2002, el incidente ocurrió en una zona residencial donde la velocidad permitida es de 30 km/h. Al superar dicho límite, el propio conductor generó las condiciones que dieron lugar al accidente. Aunado a lo anterior, se logra establecer que bajo lo estipulado en artículo 74 ibídem, en caso de intercesión como corresponde a una glorieta, la velocidad debe reducirse a 30 km/h, norma que presuntamente no fue acatada por el señor Rodríguez Mora.

Por otro lado, el día de los hechos se presentaban condiciones climáticas adversas, con lluvia que afectaba la visibilidad y el estado de la vía. De acuerdo con el artículo 108 de la misma ley, *“el conductor tiene la obligación de adecuar su conducción a factores como la humedad del suelo, visibilidad, el peso del vehículo y cualquier otra condición que pueda alterar la capacidad de frenado”*. Sin embargo, ignoró las disposiciones normativas y debido a una falta de precaución y pericia, se propició la situación que derivó en el accidente.

Así las cosas, es evidente que la causa que determinó el daño alegado por la parte demandante no puede ser endilgado al Distrito Especial de Santiago de Cali.

El conductor, debía tomar las precauciones necesarias como quiera que se encontraba realizando una “actividad peligrosa”, lo que demandaba conducir con mayor cuidado y a la velocidad permitida, que le hubiese posibilitado la observancia de los posibles obstáculos de la vía para superarlos sin dificultad.

Es decir, el conductor de la motocicleta con su actuar infringió disposiciones del Código Nacional de Tránsito, evento en el cual se rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y la falla para que se configure la responsabilidad del Distrito, pues los hechos deben analizarse en el presente caso bajo el régimen de la falla probada.

● CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

La participación del demandante influyó directamente en el resultado, por lo que impide determinar con certeza cuál fue la omisión y la relación de causalidad que atribuye como responsable al Distrito Especial de Santiago de Cali. Si bien, el señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA, en su calidad de patrullero de policía, debía demostrar pericia en la conducción, dado que su profesión lo exige, también estaba obligado actuar con un



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

alto grado de diligencia y cuidado, sin embargo, se evidencia una transgresión a estas exigencias, ya que no respetó las normas de tránsito y excedió los límites de velocidad.

En consecuencia, el accidente fue producto de la falta de experticia y cuidado, reflejada en la conducta imprudente del señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA, además, las condiciones climáticas de ese día exigían una mayor precaución, dado que las calles estaban húmedas debido a la lluvia, este hecho agrava su responsabilidad, pues ignoró las medidas de seguridad requeridas por la normativa vigente.

La presencia de un bache en la vía no acredita, por sí sola, el incumplimiento de las obligaciones del Distrito Especial de Santiago de Cali, pues es un hecho que las carreteras sufren deterioros constantes debido al uso continuo y son corregidos específicamente por la entidad competente. Ante ello, la parte demandante pretende atribuir responsabilidad a la entidad demandada bajo el argumento de que la vía donde ocurrió el accidente carecía de una señalización adecuada y la debida demarcación que advirtiera la presencia de huecos.

Se puede observar en abundante jurisprudencia, el Consejo de Estado' ha sostenido que:

"la sola demostración del mal estado de la vía, no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la Administración en su deber de mantenimiento de la malla vial".

Con base a lo anterior, resulta pertinente señalar que, si un motociclista se encuentra un bache en la vía y no logra esquivarlo, en caso de caer, las lesiones serán mínimas si conduce a una velocidad moderada, pero si excede el límite permitido, es evidente que las consecuencias serán mucho más graves, como ocurrió en el presente caso. Por lo tanto, el deterioro en la vía no puede por sí solo, dar lugar a una falla en el servicio sino se demuestra, como en este caso, que la entidad responsable del mantenimiento omitió su deber de conservación y no realizó gestión alguna para mantener la vía en buen estado.

En consecuencia, la responsabilidad recae exclusivamente en el señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA, ya que, si bien, en la demanda señala la existencia de un hueco en la vía, el siniestro se produjo debido a su falta de precaución, quien no ajustó su velocidad a las condiciones de la vía, la cual requería una precaución más prudente, considerando tanto la irregularidad del terreno, como la humedad presente en la calzada.

Sobre la conducta y previsión que le cabe asumir a los conductores de vehículos el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

"Quien conduzca debe prever aún aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa; más allá de este límite su conducta



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor” (Expediente No. 9722, Diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández).

En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la administración, lo cual le corresponde probar. Sobre este particular, considero pertinente hacer referencia a los planteamientos esbozados por el tratadista JUAN CARLOS HENAO, en su libro EL DAÑO, Universidad Externado de Colombia, primera edición, julio de 1.998, página. 38, cuando afirma:

“Sin embargo, en ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. En efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño.

Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe, pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”.

Por eso valga repetirlo, se considera que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte, de suyo, a quien lo sufre en acreedor de una indemnización.

Si cotejamos la primera hipótesis de la tesis expuesta por el ilustre tratadista con el asunto que nos ocupa, llegamos a la siguiente conclusión: Que el daño existe, pero no es atribuible al demandado Distrito Especial de Santiago de Cali, por no haber en este caso prueba de la falla en el servicio y del nexo de causalidad entre estos dos, adicional a lo anterior, se tiene configurada una causal de exoneración como es la culpa exclusiva de la víctima al conducir el vehículo sin la debida pericia y bajo el acatamiento de las normas de tránsito, evento en el cual se rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el hecho dañoso y el daño para que se configure la responsabilidad de la entidad demandada.

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATRIBUIBLE AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

El artículo 90 Constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado, en virtud de la cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo que se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico, (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, etc. y (iii) la existencia de un nexo de causalidad entre los dos.

Así las cosas, al no acreditarse la existencia de la falla del servicio, no hay lugar a declarar administrativamente responsable al Distrito de Santiago de Cali por el daño



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

supuestamente padecido por la parte demandante, razón por la cual no es procedente un pronunciamiento favorable a las pretensiones de los actores.

INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD QUE PERMITA ACREDITAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Las pruebas aportadas en el proceso evidencian que en el presente caso, no se configuran los elementos necesarios para acreditar la falla en el servicio por parte del Distrito de Santiago de Cali. Aunque se demuestre la existencia del daño, no se evidencia el nexo de causalidad que permita atribuirle responsabilidad. La parte demandante pretende imputar responsabilidad administrativa derivada del accidente de tránsito, fundamenta sus pretensiones en la hipótesis de accidente de tránsito “huecos en la vía”.

A través de la jurisprudencia, es necesario demostrar la relación de causa y efecto para atribuir un resultado y declarar responsable a una persona por una acción u omisión, *de modo que si no se prueba la verdadera causa que desencadenó el hecho dañoso, no es posible atribuir responsabilidad al demandado. Por ello para que la pretensión de responsabilidad prospere es necesario que el demandante acredite el daño y ese resultado tuvo por causa directa y adecuada la conducta que se le imputa al demandado*¹

CARGA PROBATORIA EN CABEZA DE LA ACCIONANTE E INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA EN EL PARTICULAR.

Es importante señalar que, en virtud del principio de la carga de la prueba, corresponde a la parte actora, demostrar los hechos constitutivos de la falla, para endilgarle así a las entidades accionadas algún tipo de responsabilidad. Sobre este particular se ocupó el Consejo de Estado, en providencia de fecha 08 de junio de 2011, así:

“Cuando se imputa responsabilidad al Estado en virtud de una falla del servicio, que es aquella que se presenta cuando el servicio no funciona, o funciona mal o tardíamente, por el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las autoridades y de tal circunstancia se derivan daños a terceros, se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir, aquel que jurídicamente no está obligada a soportar, y el nexo de causalidad entre estos dos, es decir, que fue ese erróneo o ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño

(...)

En el presente caso, la parte actora no probó la falla del servicio que pregonó en su demanda y en tales condiciones, considera la Sala que no resulta procedente deducir responsabilidad alguna a cargo de la Nación-Ministerio de Defensa; en consecuencia, estuvieron bien denegadas las pretensiones de la demanda, razón por la cual, se confirmará la sentencia de primera instancia”

Es importante reiterar que el accionante, en su calidad de demandante, asume la responsabilidad de aportar las pruebas que sustenten los perjuicios alegados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales reclama una indemnización debe estar debidamente demostrado mediante los medios probatorios establecidos por la ley para estos casos.

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 21 de septiembre de 2020, Rad 58621. C.P. Guillermo Sánchez



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

La única evidencia que se presenta, sobre la cual se fundamenta la demanda, es el informe de tránsito presentado. Sin embargo, esto no demuestra la conexión con la falla que se alega, ya que queda claro que la intervención crucial de la misma víctima en su conducta fue determinante, ya que desplegó una serie de imprudencias al infringir las normas de tránsito.

Con base a lo expuesto, en el presente caso la parte actora no aportó pruebas que acrediten que el accidente o perjuicio sufrido se haya originado como consecuencia de una negligencia o falla alguna del servicio. Conforme a lo planteado, se evidencia que la conducta del señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA fue la causa determinante del accidente, lo que generó una ruptura con el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y la falla del servicio, elemento esencial para estructurar la responsabilidad del Estado.

VII. PRUEBAS

Como pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 solicitó tener en cuenta como pruebas las presentadas y pedidas por la parte actora, con la posibilidad de ser controvertidas en el transcurso del proceso.

- Solicito respetuosamente al Despacho, se oficie, a la Policía Nacional Grupo de Talento Humano MECAL, con el fin de solicitar copia del expediente que se dio con ocasión a la “CALIFICACIÓN INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES No. 421/2022” del señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA, a efectos de constatar las actuaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2022, y determinar si continúa registrando vínculos o aportes activos para la entidad.
- Solicito respetuosamente al Despacho, se oficie, requiera la Policía Nacional Grupo de Talento Humano MECAL, con el propósito de verificar si el señor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ MORA recibió alguna indemnización como consecuencia del accidente ocurrido el 8 de noviembre 2022.

VIII. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y ANEXOS

En escrito separado con el fin de que se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a las Compañías Aseguradoras: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A 30%, SBS SEGUROS COLOMBIA S.A (anteriormente AIG SEGUROS COLOMBIA S.A) 20%, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 22%, CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA 28%, quienes figuran en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.1507222001226, expedida por la Compañía de Seguros MAPFRE SEGUROS GENERALES CO. También se aportan Certificados de existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá.

X. SOBRE COSTAS

Solicito al Honorable Juez se condene en costas a la parte demandante, en la medida en que está facultado para ello en virtud de lo establecido en el artículo 188 del C.P.A. y de los C.A. (Ley 1437 de 2011).



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXOS

Los siguientes documentos:

- 1) Poder especial a mi conferido por la Directora Jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali, con sus respectivos anexos.
- 2) Documento con el cual se da contestación a la demanda folios.
- 3) Escrito de Llamamiento en Garantía.
- 4) Copia Póliza N.1507222001226, expedida por la Compañía de Seguros MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA con vigencia desde el (30) de abril de 2022 hasta el (01) de diciembre de 2022.
- 5) Certificados de Existencia y Representación legal expedidos por Cámara de Comercio de Bogotá de las compañías de Seguros: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A (anteriormente AIG SEGUROS COLOMBIA S.A) , ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO donde figuran los respectivos datos para efectos de notificaciones.

XI. NOTIFICACIONES – CANALES DIGITALES DE COMUNICACIÓN

El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, recibirá notificaciones en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co El suscrito apoderado, en el correo electrónico: aura.maria.benavides07@gmail.com

Por instrucciones del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito de Santiago de Cali, las actuaciones de la entidad se remitirán a través del correo electrónico institucional ejercicio.defensa01@cali.gov.co el cual no está destinado para recibir notificaciones.

Respetuosamente,

Aura María Benavides Ávila
C.C. No. 1.112.460.391 de Jamundí
T.P 220.484 C.S.J